

**PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
(pp. 2-12)**

**PERSPECTIVA DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT (pp. 13-
23)**

SUSANA BORRÀS PENTINAT

*Profesora colaboradora de Derecho Internacional Público / Professora col-laboradora
de Dret Internacional Públic
Universitat Rovira i Virgili*

Sumario: 1. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. 2. Resolución de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre prevención del delito y respuestas de la justicia penal ante el tráfico ilícito de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. 3. Resolución 16/11 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos: “Los derechos humanos y el medio ambiente”. 4. La V Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

La crónica jurídica internacional de este tercer número de la *Revista Catalana de Dret Ambiental* ofrece un análisis de los documentos más significativos que se han adoptado en los últimos seis meses: el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales; la Resolución de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre prevención del delito y respuestas de la justicia penal ante el tráfico ilícito de especies amenazadas de fauna y flora silvestres; la Resolución 16/11 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos relativa a los derechos humanos y el medio ambiente, y el informe de la V Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

El primero es un documento de especial relevancia para los pueblos indígenas, puesto que reconoce los territorios como sustento y fuente de la identidad cultural y todos los derechos de los pueblos indígenas.

El segundo aborda una preocupación que aumenta entre la comunidad internacional, que es la creciente participación de grupos delictivos organizados en todos los aspectos del tráfico ilícito de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. La Resolución de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre la prevención del delito y respuestas de la justicia penal ante el tráfico ilícito de especies amenazadas de fauna y flora silvestres trata, precisamente, esta problemática, que sin duda reviste importancia, pues el tráfico de fauna silvestre es considerado el tercer negocio ilegal más grande y lucrativo del mundo.

En tercer lugar, la Resolución 16/11 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, “Los derechos humanos y el medio ambiente”, determina la importante relación de los impactos ambientales sobre el disfrute de los derechos humanos, especialmente en relación con las poblaciones más vulnerables.

Finalmente, el último documento es el reflejo de un nuevo paso en la erradicación de los contaminantes orgánicos persistentes. La celebración en 2011 de la V Conferencia de

las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes ha permitido que el endosulfán se deje de producir y utilizar a nivel mundial.

1. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales

El 17 de febrero de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”¹.

La CIDH parte de la consideración de que la protección y el goce del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales implican no solo la protección de una unidad económica, sino también de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra.

El informe, dividido en nueve capítulos, compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras y recursos naturales. Además de exigir el respeto de las tierras de los pueblos indígenas y tribales, define a los pueblos indígenas y tribales; señala las obligaciones estatales respecto a estos pueblos; explica los derechos de propiedad indígena y tribal, y esclarece el contenido específico de estos derechos de propiedad sobre los territorios, entre otras cuestiones. El contenido no solo se basa en los instrumentos jurídicos del sistema interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana a la luz del desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos en general, sino que también señala problemas, guías y buenas prácticas específicas con miras a ampliar el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales.

El informe empieza señalando lo siguiente: “Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual”. En este sentido, el derecho de los pueblos

¹ Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, de 30 diciembre 2009. Disponible en: <http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Tierras-Ancestrales.ESP.pdf>.

indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales se considera como un derecho en sí mismo y garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos, como son: el derecho al agua, a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, a la salud, a la vida, al honor y a la libertad de conciencia, religión, movimiento y resistencia.

Además, según la CIDH, el reconocimiento de los territorios indígenas no exige como requisito un título de propiedad, porque existe una clara relación entre la tierra y su identidad cultural. Al respecto, protege “el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena”². El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, según el informe de la CIDH, también ha concluido que los derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos y abarcan una tradición y una identificación cultural de estos pueblos con sus tierras que han sido generalmente reconocidas.

El derecho a la propiedad, garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos³ en su artículo 21, adquiere una importancia singular para los pueblos indígenas y tribales, puesto que es una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye el uso y disfrute de sus recursos naturales y que se relaciona directamente, incluso como un prerequisito, con los derechos a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación y a la libertad de movimiento y residencia, y con los derechos de la familia.

² La preservación de la cultura de los pueblos indígenas está íntimamente ligada a sus territorios. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Sentencia del Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, del 29 de marzo de 2006, ya señaló explícitamente que “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf.

³ Vid. Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, (Pacto de San José). Disponible en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html>.

A pesar de que los Estados tienen la obligación de revisar su legislación para garantizar que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se cumplan de acuerdo con lo establecido en los instrumentos internacionales, constantemente se ofrecen concesiones a empresas nacionales y transnacionales para que tierras indígenas sean investigadas, estudiadas y explotadas sin el consentimiento de los afectados. Por este motivo el informe analiza las obligaciones que tienen los Estados de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte a sus territorios. La consulta se debe realizar sobre todos los temas susceptibles de afectarlos, debe estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado y debe implementarse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones.

2. Resolución de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal sobre prevención del delito y respuestas de la justicia penal ante el tráfico ilícito de especies amenazadas de fauna y flora silvestres

En el marco del 20.^º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CPDJP) de la ONU⁴, que tuvo lugar del 11 al 15 de abril de 2011 en Viena, Austria, se aprobó la Resolución sobre la “Prevención del delito y respuestas de la justicia penal para la protección contra el tráfico ilícito de especies amenazadas de flora y fauna silvestres”⁵, que fue propuesta por Chile, Costa Rica, Guatemala, México y Filipinas⁶.

⁴ La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal fue establecida en febrero de 1992 como un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU. Esta comisión celebra sus sesiones anuales en Viena, Austria, y se ocupa de promover la acción internacional para combatir el crimen organizado en sus distintas manifestaciones. Está constituida por 40 miembros, que son elegidos por el ECOSOC sobre un principio de representación geográfica proporcional.

⁵ Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, Consejo Económico y Social, 12 de abril de 2011, E/CN.15/2011/L.5/Rev.1. Disponible en: http://www.cites.org/eng/news/sundry/2011/CCPCJ_Res.pdf.

⁶ En el marco de la Comisión, se adoptaron además resoluciones sobre temas tan relevantes como el lavado de dinero, los fraudes cometidos por Internet, la trata de personas, la cooperación internacional, la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales en materia de delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la falsificación de medicamentos, los delitos cometidos en el mar y el tráfico ilícito de bienes culturales, entre otros. Asimismo, junto con esta resolución, se adoptó la Resolución titulada “Promoción de la asistencia técnica y fomento de la capacidad en el combate al delito cibernético”.

La Resolución constituye un avance en el fomento de la cooperación internacional para prevenir y combatir una de las expresiones nuevas y emergentes de la delincuencia organizada transnacional como es la del tráfico ilícito de especies amenazadas de flora y fauna silvestres. Este es un nuevo ejemplo de cómo el delito contra el medio ambiente es un gran negocio. En realidad, es una de las actividades delictivas más rentables que tienen lugar en el mundo, con ganancias de miles de millones de dólares. El comercio ilegal de fauna y flora en todo el mundo asciende, según un informe difundido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a 17.000 millones de dólares por año: 10.000 millones por fauna, y 7.000 millones por flora y madera⁷.

El texto de la Resolución se refiere a la implicación de determinados grupos de crimen organizado en el tráfico de especies, reconoce el trabajo realizado en el ámbito internacional —por ejemplo, el reciente establecimiento del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC, en sus siglas en inglés)— y urge a los Estados miembros de las Naciones Unidas a reforzar la cooperación internacional, regional y bilateral en esta cuestión. La Comisión también invita a los Estados a reconocer como crimen de especial gravedad el tráfico de especies en peligro de extinción y solicita asistencia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para hacer frente a este crimen.

En concreto, alienta enérgicamente a los Estados miembros a que adopten medidas apropiadas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, incluida, según proceda, la aprobación de la legislación necesaria para prevenir, investigar y perseguir este tráfico ilícito, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 1973.

Al respecto, también se considera importante que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional⁸ y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción⁹ se apliquen plenamente para reforzar la lucha contra el

⁷ Vid. *Informe de actividades de la Interpol*, 1998, AGN/ 68/ RAP/1. Este informe está disponible en: <http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/AGN68/Reports/AGN68R01es.pdf>. (consultado el 6 de mayo de 2011).

⁸ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2.225, núm. 39.574.

⁹ Ibíd., vol. 2.349, núm. 42.146.

tráfico ilícito de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, y, para ello, invita a los Estados miembros a ratificar y aplicar esos instrumentos internacionales.

A pesar de que la Resolución reconoce la gravedad de este crimen relacionado con el tráfico ilegal de especies, no resulta lo suficientemente clarificadora en el reconocimiento de la implicación de grupos de crimen organizado en el tráfico ilegal de especies de fauna y flora. En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha visto reforzado su mandato con el fin de continuar sus esfuerzos de asistencia a los Estados para combatir esta clase de crímenes.

La Resolución también refleja los deseos de la comunidad CITES de reforzar el apoyo a sus funcionarios y la mejora de su capacitación en relación con la prevención, la investigación y la persecución del tráfico ilícito de especies en peligro de extinción. También se reconoce el trabajo realizado por el ICCWC, que se encuentra a punto de finalizar un acuerdo sobre un programa de actividades. Quizás lo más importante sea, como bien ha demostrado la Comisión, que el crimen contra la vida salvaje es parte de un crimen de especial gravedad, al igual que el tráfico de narcóticos, armas y personas, y que requiere, en consecuencia, una respuesta similar y determinada.

3. Resolución 16/11 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos: “Los derechos humanos y el medio ambiente”

En su 16.^a sesión, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Resolución “Los derechos humanos y el medio ambiente”¹⁰.

El motivo de la adopción de esta resolución es, por una parte, la constatación de que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente pueden contribuir al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, sobre todo en un momento en el que el desarrollo sostenible va a jugar un papel crucial. La celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Durban (Sudáfrica) en 2011 y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, y en particular del Objetivo 7 (garantizar la sostenibilidad del medio ambiente), constituyen

¹⁰ Vid. UN Human Rights Council, *Human rights and the environment: resolution / adopted by the Human Rights Council, 12 de abril de 2011, A/HRC/RES/16/11*, disponible en: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dc1189b2.html> (consultada el 6 de mayo de 2011).

hitos fundamentales para promover la protección del medio ambiente y de los derechos humanos y garantizar el éxito de estas grandes cumbres internacionales.

Asimismo, se establece que la buena gestión dentro de cada país y en el plano internacional es fundamental para el desarrollo sostenible y que los seres humanos se encuentran en el centro de las preocupaciones por el desarrollo sostenible, que el derecho al desarrollo ha de hacerse efectivo para satisfacer equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y de medio ambiente de la generación actual y de las generaciones futuras, y que la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.

Por otra, en esta resolución se reconoce que los daños ambientales pueden tener consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de los derechos humanos. No obstante, debe considerarse que, si bien estas consecuencias afectan a las personas y las comunidades de todo el mundo, los efectos del cambio climático se dejarán sentir con más fuerza en los sectores de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables. En este sentido, se reconoce que el carácter transnacional del daño ambiental exige cooperar eficazmente a nivel internacional para hacerle frente, a fin de apoyar los esfuerzos desplegados por cada país para hacer efectivos los derechos humanos.

Por este motivo, la Resolución reafirma que las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de políticas internacionales, regionales y nacionales en la esfera de la protección ambiental, y fomentar su coherencia y la legitimidad y sostenibilidad de sus resultados. Además, se insta a los Estados a tomar en consideración los derechos humanos al elaborar sus políticas ambientales. Asimismo, se solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en consulta con los Estados miembros de las Naciones Unidas, los órganos intergubernamentales y las organizaciones internacionales pertinentes —como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente pertinentes, los procedimientos especiales, los órganos de tratados y otros interesados—, y teniendo en cuenta sus opiniones, realice, dentro de los límites de los recursos existentes, un estudio analítico detallado de la relación entre el cambio climático y los derechos humanos, y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos antes de su 19.^º período de sesiones.

4. La V Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) se aprobó en mayo de 2001, al cabo de tres años de negociaciones celebradas en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)¹¹.

El objetivo general del Convenio de Estocolmo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. El Convenio alude expresamente al principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El principio se hace operativo en el artículo 8, que establece las disposiciones para la inclusión de nuevos productos químicos en los anexos del Convenio.

De acuerdo con el Convenio de Estocolmo, están prohibidas la producción y la utilización de los nueve productos químicos producidos de forma intencional e incluidos inicialmente en su anexo A (aldrina, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y BPC), salvo que haya exenciones genéricas o específicas. Además, la producción y la utilización de DDT, un plaguicida que se emplea aún en numerosos países en desarrollo en la lucha contra los vectores de la malaria y de otras enfermedades, están muy restringidas, como se expone en el anexo B del Convenio de Estocolmo. Por último, el anexo C recoge tres sustancias (PCDD/PCDF, HCB y PCB) que se pueden formar y liberar de forma no intencional. A estas sustancias iniciales se les añadieron otras nueve (octaBDE comercial, pentaBDE comercial, PFOS, clordecona, hexabromobifenilo, alfa-hexaclorociclohexano, beta-hexaclorociclohexano, lindano y pentaclorobenceno), que se incluyeron en los anexos mediante decisiones adoptadas en la IV Conferencia de las Partes en mayo de 2009.

La V Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo (en adelante, COP-5) se celebró del 25 al 29 de abril de 2011 en Ginebra, en el Centre International de Conférences (CICG), bajo el lema “Retos de la Química, soluciones sostenibles”¹². Esta

¹¹ El Convenio entró en vigor el 17 de mayo de 2004. BOE núm. 151, de 23 junio de 2004. Texto disponible en: <http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/23/pdfs/A22737-22754.pdf>.

¹² Consultese la página oficial de la Conferencia en: <http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP5/tabid/1267/mct1/ViewDetails/EventModID/870/EVENTID/109/xmid/4351/language/en-US/Default.aspx>.

COP-5, que coincidió con el décimo aniversario de la adopción del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, reunió a más de 700 participantes, representantes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y agencias de la ONU¹³.

La Conferencia de las Partes examinó y aprobó la propuesta, presentada en el año 2007 por la Unión Europea, de inclusión del endosulfán¹⁴ en el anexo A del Convenio, y, tal como recomendó el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes¹⁵, su eliminación y la gestión de un programa de trabajo para la implementación de alternativas para este insecticida de uso agrícola.

Más de 160 países alcanzaron un acuerdo para retirar progresivamente el endosulfán, un pesticida peligroso que todavía se usa en todo el mundo. Con esta decisión, ya son 22 los productos químicos listados en el Convenio de Estocolmo¹⁶ como tóxicos, duraderos y propensos a acumularse en la cadena alimentaria y en las personas.

El endosulfán, contaminante orgánico persistente, deberá dejar de producirse y usarse a nivel mundial. La decisión contó con la oposición de la India, que es uno de los pocos países que todavía producen endosulfán. Por este motivo, las únicas excepciones a este acuerdo general fueron la India, China y Uganda, que solicitaron venias en combinaciones cultivos-plaga específicas como algodón, café, tabaco, manzanas, entre otras, con un período para esa excepción de cinco años. En este sentido, se aspira a que la sustitución de este químico no sea con otro químico de síntesis, sino mediante alternativas agroecológicas de manejo de cultivos y control de plagas. Además, los países desarrollados aceptaron proporcionar la ayuda técnica y financiera necesaria para la transición del endosulfán a alternativas más seguras.

¹³ Consultese la nota informativa sobre la V Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo, UNEP/POPS/COP.5/INF/1, de 7 de febrero de 2011. Disponible en: <http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP5/COP5Documents/tabid/1268/language/en-US/Default.aspx>.

¹⁴ El endosulfán es un pesticida tóxico que está prohibido en 80 países, pero que todavía se usa en China, en la India, en la mayor parte de África oriental, en Argentina y en México.

¹⁵ En efecto, de acuerdo con el artículo 8 del Convenio, las partes pueden presentar a la Secretaría propuestas de inclusión de un producto químico en los anexos A, B y/o C. La Secretaría comprueba si la propuesta contiene la información necesaria. En caso de ser satisfactoria, la propuesta se envía al Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (CE COP), que la examina teniendo en cuenta toda la información facilitada. Cuando el CE COP decide que se han cumplido los criterios, examina la propuesta y prepara un proyecto de perfil de riesgos.

¹⁶ Cuando se adoptó ese tratado, en la lista se incluyeron 12 sustancias. En la última conferencia, realizada en 2009, se agregaron otras nueve.

Hubo otra cuestión discutida en esta COP, ya abordada en una decisión adoptada en la reunión anterior, celebrada en 2009, cuando dos retardantes de llama bromados usados en aparatos electrónicos de uso doméstico, en muebles y en otros productos fueron añadidos al Convenio de Estocolmo¹⁷. Entonces, la Unión Europea y otros países desarrollados se beneficiaron de una exención que permitía la exportación y el reciclaje de los productos usados que contienen estos productos químicos. Conforme al tratado original, se prohibió el reciclaje de materiales que contienen estos y otros productos químicos similares, que por su capacidad de contaminar aún más el flujo de residuos ponen en peligro la salud humana y el entorno¹⁸.

El Comité de Examen presentó un informe con decenas de recomendaciones para corregir estos vacíos legales¹⁹. En la COP 5, Kenia, en nombre del Grupo Africano y apoyada por distintas partes, propuso prohibir las exportaciones con el fin de prevenir la contaminación adicional generada por la ola de desechos de ordenadores, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos provenientes de los países desarrollados. Después de arduas negociaciones entre los países del Norte y los del Sur, se adoptó un compromiso débil que tan solo desalienta la exportación de estos residuos hacia los países en desarrollo.

La dificultad de lograr un consenso sobre asuntos importantes se agravó por el desacuerdo permanente sobre las normas de procedimiento que deben guiar las deliberaciones en el ámbito del Convenio de Estocolmo. De acuerdo con las reglas adoptadas en la primera sesión, las decisiones sobre cuestiones de fondo que no sean enmiendas al Tratado deben adoptarse por consenso. En su forma actual, la disposición para permitir la toma de decisiones por mayoría de dos tercios de las partes presentes y votantes ha demostrado ser inoperante, porque el acuerdo mismo sobre la votación requiere consenso.

No obstante, las negociaciones han avanzado en otras cuestiones con el fin de lograr la eficacia del Convenio. En este sentido, y reconociendo que la acción global es necesaria

¹⁷ Vid. informe de la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en torno a la labor realizada en su cuarta reunión. UNEP/POPS/COP.4/38, 8 de mayo de 2009. Disponible en: <http://excops.unep.ch/documents/decisions/SC4-34-s.pdf>.

¹⁸ Sobre esta cuestión, consultese la página oficial del IPEN en: <http://ipen.org/cop5/brominated-flame-retardants/> (visitada el 8 de mayo de 2011).

¹⁹ Disponible en: <http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP5/COP5Documents/tabid/1268/language/en-US/Default.aspx>.

para eliminar estos contaminantes globales, el Convenio de Estocolmo compromete ayuda financiera para los países en desarrollo. Los países desarrollados y los países en vías de desarrollo llegaron a un acuerdo pragmático con el fin de trabajar para satisfacer las necesidades tecnológicas con los conocimientos técnicos, poniendo especial énfasis en las alternativas no químicas como son las prácticas agroecológicas. En todo caso, se estima que los costes que el cumplimiento del tratado supone para los países en desarrollo superan los recursos disponibles, de manera que al final no se alcanzó ningún acuerdo significativo sobre la manera de reducir esta brecha de financiación.

Asimismo, se hicieron algunos progresos para coordinar el Convenio de Estocolmo con otros dos tratados internacionales en materia de comercio de productos químicos peligrosos y residuos peligrosos. Con ello se pretendía reducir los costes de cumplimiento y administración de estos acuerdos y configurar un enfoque más coherente para la gestión de los productos químicos en todo el mundo. Durante los últimos 10 años, las partes no han logrado un acuerdo sobre el establecimiento de un mecanismo de cumplimiento del Convenio. En este sentido, las partes tienen como objetivo salvar sus diferencias antes de la próxima reunión en 2013. En su declaración final, la Unión Europea anunció su intención de incluir el hexaclorobutadieno, el pentaclorofenol y los naftalenos clorados en el Convenio de Estocolmo.

Sumari: 1. L'informe de la Comissió Interamericana de Drets Humans sobre els drets dels pobles indígenes als seus territoris ancestrals. 2. La resolució de la Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal sobre prevenció del delicte i respistes de la justícia penal davant del tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres. 3. La Resolució 16/11, aprovada pel Consell de Drets Humans, “Els drets humans i el medi ambient”. 4. La V Conferència de les Parts en el Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents.

La crònica jurídica internacional d'aquest tercer número de la REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL analitza els documents més significatius que s'han adoptat en els últims sis mesos: l'informe de la Comissió Interamericana de Drets Humans sobre els drets dels pobles indígenes als seus territoris ancestrals; la resolució de la Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal sobre prevenció del delicte i respistes de la justícia penal davant del tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres; la Resolució 16/11, aprovada pel Consell de Drets Humans, relativa als drets humans i al medi ambient, i l'informe de la V Conferència de les Parts en el Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents.

El primer representa un document especialment rellevant per als pobles indígenes, ja que reconeix els territoris com a suport i font de la identitat cultural i tots els drets dels pobles indígenes.

El segon aborda la preocupació creixent entre la comunitat internacional, que és la incipient participació de grups delictius organitzats en tots els aspectes del tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de flora i fauna silvestres. La “resolució de la Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal sobre la prevenció del delicte i respistes de la justícia penal davant del tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres” tracta, precisament, aquesta problemàtica, que, sens dubte, adquireix importància, ja que el tràfic de fauna silvestre es considera el tercer negoci il·legal més gran i lucratiu del món.

En tercer lloc, la Resolució 16/11 aprovada pel Consell de Drets Humans, “Els drets humans i el medi ambient”, determina la important relació dels impactes ambientals sobre el gaudi dels drets humans, especialment sobre les poblacions més vulnerables.

Finalment, l'últim document és el reflex d'un pas més a l'hora d'eradicar els agents contaminants orgànics persistents. La V Conferència de les Parts en el Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents de 2001 ha permès retirar l'endosulfan de la producció i l'ús en l'àmbit mundial.

1. L'informe de la Comissió Interamericana de Drets Humans sobre els drets dels pobles indígenes als seus territoris ancestrals

El 17 de febrer de 2011 la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) ha publicat l'informe “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales”²⁰.

La CIDH parteix de la consideració que la protecció i el gaudi del dret a la propietat dels pobles indígenes sobre els seus territoris ancestrals impliquen no sols la protecció de la unitat econòmica, sinó dels drets humans d'una col·lectivitat que basa el seu desenvolupament econòmic, social i cultural en la relació amb la terra.

L'informe, dividit en nou capítols, compila i analitza l'abast dels drets dels pobles indígenes i tribals en els seus territoris, terres i recursos naturals. A més d'exigir el respecte de les terres dels pobles indígenes i tribals, defineix els pobles indígenes i tribals; assenyala les obligacions estatals enfront dels pobles; explica els drets de propietat indígena i tribal; aclareix el contingut específic d'aquests drets de propietat en els territoris, entre altres contribucions. El contingut no només es basa en els instruments jurídics del sistema interamericà, tal com ha interpretat la jurisprudència de la Comissió i de la Cort interamericanes a la llum dels desenvolupaments en el dret internacional dels drets humans en general, sinó que també assenyala problemes, guies i bones pràctiques específiques, amb vista a ampliar el gaudi dels drets humans dels pobles indígenes i tribals.

L'informe comença assenyalant que “*Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual*”. En aquest sentit, el dret dels pobles indígenes i tribals a la propietat comunal sobre les seves terres i recursos naturals es considera un dret en si mateix i com a garantia del gaudi efectiu d'altres drets bàsics, com són: el dret a l'aigua, a existir en condicions dignes, a l'alimentació, el dret a la salut, a la vida, a l'honor i a la llibertat de consciència, a la religió, al moviment i a la resistència.

²⁰ Vid. Comissió Interamericana de Drets Humans, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, de 30 desembre 2009. Disponible a: <<http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/tierras-ancesterales.ESP.pdf>>.

A més, segons la CIDH, el reconeixement dels territoris indígenes no exigeix com a requisit el títol de propietat, perquè hi ha una relació clara entre la terra i la seva identitat cultural. Respecte d'això, estableix que “*el uso o presencia tradicionales, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena*”²¹. El Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial de l’ONU, segons l’informe de la CIDH, també ha conclòs que els drets territorials dels pobles indígenes són únics, i comprenen una tradició i identificació cultural dels pobles indígenes amb les seves terres que ha estat reconeguda generalment.

El dret a la propietat, garantit per la Convenció Americana sobre Drets Humans²², en l’article 21, adquireix una importància singular per als pobles indígenes i tribals, ja que és la base fonamental per al desenvolupament de la cultura, la vida espiritual, la integritat i la supervivència econòmica de les comunitats indígenes. És un dret al territori que inclou l’ús i el gaudi dels recursos naturals que es relaciona directament, fins i tot com un prerequisit, amb els drets a l’existència en condicions dignes, a l’alimentació, a l’aigua, a la salut, a la vida, a l’honor, a la dignitat, a la llibertat de consciència i religió, a la llibertat d’associació, als drets de la família, i a la llibertat de moviment i residència.

A pesar que els estats tenen l’obligació de revisar la legislació per garantir que els drets territorials dels pobles indígenes es compleixin d’acord amb el que estableixen els instruments internacionals, constantment, s’ofereixen concessions a empreses nacionals i transnacionals perquè les terres indígenes s’investiguin, s’estudiïn i s’exploitin sense el consentiment dels afectats. Per aquest motiu, l’informe analitza les obligacions que tenen els estats a consultar els pobles indígenes i a garantir la seva participació en les

²¹ La preservació de la cultura dels pobles indígenes està íntimament lligada als seus territoris. Així, la Cort Interamericana de Drets Humans, en la Sentència del cas “Comunitat indígena sawhoyamaxa enfront de Paraguai”, del 29 de març de 2006, ja va assenyalar explícitament que “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores”. Disponible a: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articles/seriec_146_esp2.pdf>.

²² Vid. Convenció americana sobre drets humans subscrita a la Conferència Especialitzada Interamericana sobre Drets Humans, San José, Costa Rica, del 7 al 22 de novembre de 1969, (Pacte de San José). Disponible a: <<http://www.oas.org/juridic/spanish/tractats/b-32.html>>.

decisions relatives a qualsevol mesura que afecti els seus territoris. La consulta s'ha de realitzar sobre tots els temes que els puguin afectar, s'ha de dirigir a obtenir el seu consentiment lliure i informat, i ha d'implementar-se d'acord amb els seus costums i les seves tradicions, a través de procediments culturalment adequats, i tenint en compte els seus mètodes tradicionals en la presa de decisions.

2. La resolució de la Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal sobre prevenció del delicte i respostes de la justícia penal davant del tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres

En el marc del vintè període de sessions de la Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal (CPDJP) de l'ONU²³, que ha tingut lloc de l'11 al 15 d'abril de 2011, a Viena, Àustria, s'han aprovat, per consens, dues resolucions presentades per Mèxic: “Prevenció del delicte i respostes de la justícia penal per a la protecció contra el tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de flora i fauna silvestres”²⁴, que va ser proposada per Xile, Costa Rica, Guatemala, Mèxic i les Filipines²⁵.

La resolució és un avanç en el foment de la cooperació internacional per prevenir i combatre una de les expressions noves i emergents de la delinqüència organitzada transnacional com és la del tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de flora i fauna silvestres. Aquest és un nou exemple de com el delicte contra el medi ambient és un gran negoci. En realitat, és una de les *activitats* delictives més rendibles que tenen lloc al món, amb guanys de milers de milions de dòlars. Segons un informe difós per l'Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol), el comerç il·legal de fauna i

²³ La Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal es va establir al febrer de 1992 com un òrgan subsidiari del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'ONU. Aquesta Comissió organitza sessions anuals a Viena, Àustria, i s'ocupa de promoure l'acció internacional per combatre el crim organitzat en les diferents manifestacions. Està constituïda per quaranta membres que elegeix l'ECOSOC segons el principi de representació geogràfica proporcional.

²⁴ Comissió de Prevenció del Delicte i Justícia Penal, Consell Econòmic i Social, 12 d'abril 2011, E/CN.15/2011/L.5/Rev.1. Disponible a: <http://www.cites.org/eng/news/sundry/2011/CCPCJ_Cap.res.pdf>.

²⁵ En el marc de la Comissió, s'han adoptat, a més a més, resolucions sobre temes tan rellevants com el rentat de diners, frauds comesos per Internet, tràfic de persones, cooperació internacional, aplicació efectiva dels instruments internacionals en matèria de delinqüència organitzada transnacional, terrorisme, falsificació de medicaments, delictes al mar i tràfic il·lícit de béns culturals, entre altres. Així mateix junts amb aquesta resolució, s'ha adoptat la resolució “Promoció de l'assistència tècnica i foment de la capacitat en el combat contra el delicte cibernètic”.

flora en tot el món ascendeix a 17.000 milions de dòlars l'any: 10.000 milions per fauna i 7.000 milions per flora i fusta²⁶.

El text de la Resolució fa referència a la implicació de determinats grups de crim organitzat en el tràfic d'espècies, reconeix el treball realitzat en l'àmbit internacional, per exemple, l'establiment recent del Consorci Internacional sobre la Lluita del Crim contra la Vida Salvatge (ICCWC és la sigla en anglès), i insta els estats membres de les Nacions Unides a reforçar la cooperació internacional, regional i bilateral pel que fa a aquesta qüestió. La Comissió també convida els Estats a reconèixer com a crim d'especial gravetat el tràfic d'espècies en perill d'extinció, i sol·licita assistència a l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte per fer-hi front.

En concret, encoratja enèrgicament els estats membres perquè adoptin mesures apropiades per prevenir i combatre el tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de flora i fauna silvestres, com ara, si escau, l'aprovació de la legislació necessària per prevenir, investigar i perseguir-lo, d'acord amb el que disposa la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres de 1973.

Respecte d'això, també es considera important que la Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional²⁷ i la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció²⁸ s'apliquin plenament per reforçar la lluita contra el tràfic il·lícit d'espècies amenaçades de flora i fauna silvestres, i, des d'aquest punt de vista, convida els estats membres a ratificar i aplicar aquests instruments internacionals.

A pesar que aquesta Resolució reconeix la gravetat d'aquest crim relacionat amb el tràfic il·legal d'espècies, no resulta prou clarificadora en el reconeixement de la implicació de grups de crim organitzat en el tràfic il·legal d'espècies de fauna i flora. En aquest sentit, l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte ha reforçat el mandat a fi de continuar els seus esforços a assistir els estats a combatre contra aquests crims.

La resolució també reflecteix els desitjos de la comunitat CITES de reforçar el suport als funcionaris i la millora de la seva capacitació pel que fa a la prevenció, la

²⁶ Vid. informe d'activitats de la Interpol, 1998, AGN/ 68/ RAP/1. Aquest informe està disponible a: <<http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/AGN68/Reports/AGN68R01es.pdf>> (consulta feta el 6 de maig 2011).

²⁷ Nacions Unides, *Treaty Series*, vol. 2225, núm. 39574.

²⁸ Ib., vol. 2349, núm. 42146.

investigació i la persecució del tràfic il·lícit d'espècies en perill d'extinció. També reconeix el treball realitzat per l'ICCWC, el qual es troba en procés de finalitzar l'acord del programa d'activitats. Potser el més important, com bé ha demostrat la Comissió, és que el crim contra la vida salvatge és part d'un crim especialment greu com el tràfic de narcòtics, armes i persones i que, en conseqüència, requereix una resposta semblant i determinada.

3. La Resolució 16/11, aprovada pel Consell de Drets Humans, “Els drets humans i el medi ambient”

En la setzena sessió, el Consell de Dret Humans de les Nacions Unides va adoptar la Resolució “Els drets humans i el medi ambient”²⁹.

El motiu d'haver adoptat aquesta resolució és, d'una banda, constatar que el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient poden contribuir al benestar humà i al gaudi dels drets humans, sobretot en un moment que el desenvolupament sostenible té un paper crucial: l'organització de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic que tindrà lloc a Durban (Sud-àfrica) el 2011, la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible que s'organitzarà el 2012 a Rio de Janeiro (Brasil), i el compliment dels Objectius de desenvolupament del mil·lenni, i en particular l'objectiu 7 (garantir la sostenibilitat del medi ambient), constitueixen fites fonamentals per promoure la protecció del medi ambient i dels drets humans i garantir l'èxit d'aquests grans cimeres internacionals.

Així mateix, la bona gestió en cada país i en l'àmbit internacional és fonamental per al desenvolupament sostenible i que els éssers humans es troben en el centre de les preocupacions pel desenvolupament sostenible, que el dret al desenvolupament ha de fer-se efectiu per satisfer equitativament les necessitats en matèria de desenvolupament i de medi ambient de la generació actual i de les generacions futures, i que la persona humana és el subjecte central del desenvolupament i ha de ser el participant actiu i el beneficiari del dret al desenvolupament.

²⁹ Vid. UN Human Rights Council, *Human rights and the environment: resolution / adopted by the Human Rights Council, 12 d'abril de 2011, A/HRC/CAP/16/11*, disponible a: <<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dc1189b2.html>> (consulta feta el 6 de maig de 2011).

D'altra banda, aquesta resolució reconeix que els danys ambientals poden tenir conseqüències negatives, tant directes com indirectes, en el gaudi efectiu dels drets humans. No obstant això, hem de considerar que si bé aquestes conseqüències afecten les persones i les comunitats de tot el món, els efectes del canvi climàtic es deixen sentir amb més força en els sectors de la població que ja es troben en situacions vulnerables. En aquest sentit, reconeix que el caràcter transnacional del dany ambiental exigeix cooperar eficaçment des del punt de vista internacional per fer-hi front, a fi de donar suport als esforços de cada país per fer efectius els drets humans.

Per aquest motiu, la resolució reafirma que les obligacions i els compromisos en matèria de drets humans poden guiar i reforçar la formulació de polítiques internacionals, regionals i nacionals en l'esfera de la protecció ambiental i fomentar-ne la coherència i la legitimitat i sostenibilitat dels resultats. A més, insta els estats que considerin els drets humans a l'hora d'elaborar polítiques ambientals. Així mateix, sol·licita a l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans que, en consulta amb els estats membres de les Nacions Unides, els òrgans intergovernamentals i les organitzacions internacionals pertinents, com el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i els acords multilaterals sobre el medi ambient pertinents, els procediments especials, els òrgans de tractats i altres interessats, i tenint en compte les seves opinions, realitzi, en els límits dels recursos existents, un estudi analític detallat de la relació entre el canvi climàtic i els drets humans, i que el presenti al Consell de Drets Humans abans del dinovè període de sessions.

4. La V Conferència de les Parts en el Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents

El Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents (COP) es va aprovar al maig de 2001, al cap de tres anys de negociacions en el marc del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA)³⁰.

L'objectiu general del Conveni d'Estocolm és protegir la salut humana i el medi ambient upfront dels contaminants orgànics persistents. El Conveni al·ludeix

³⁰ El Conveni va entrar en vigor el 17 de maig de 2004. BOE núm. 151, 23 juny de 2004. Text disponible a: <<http://www.boe.es/boe/dies/2004/06/23/pdfs/A22737-22754.pdf>>.

expressament al principi de precaució consagrat en el principi 15 de la Declaració de Rio sobre medi ambient i desenvolupament. El principi es fa operatiu en l'article 8, que estableix les disposicions per incloure nous productes químics en els annexos del Conveni.

D'acord amb el Conveni d'Estocolm, es prohibeixen la producció i la utilització dels nou productes químics elaborats de forma intencional i que s'inclouen inicialment en l'annex A (aldrín, clordà, dielrina, endrina, heptaclor, hexaclorobenzè, mirex, toxafè i BPC), llevat que hi hagi exempcions genèriques o específiques. A més, la producció i la utilització de DDT, un plaguicida que encara s'empra en nombrosos països en desenvolupament en la lluita contra els vectors de la malària i d'altres malalties, estan molt restringides, com exposa l'annex B del Conveni d'Estocolm. Finalment, l'annex C recull tres substàncies (PCDD/PCDF, HCB i PCB) que es poden formar i alliberar de forma no intencional. A aquestes substàncies inicials se'n van afegir nou més (octaBDE comercial, pentaBDE comercial, PFOS, clordecona, hexabromobifenil, alfa-hexaclorociclohexà, beta-hexaclorociclohexà, lindà i pentaclorobenzè), que es van incloure en els annexos per mitjà de les decisions adoptades en la quarta Conferència de les Parts al maig de 2009.

La cinquena Conferència de les Parts (d'ara endavant, COP-5) a la Convenció d'Estocolm s'ha realitzat del 25 al 29 d'abril de 2011 a Ginebra, al Centre Internacional de Conferències (CICG), sota el lema “Reptes de la química, solucions Sostenibles”³¹. La COP-5, que coincideix amb desè aniversari de l'adopció de la Convenció d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents, ha reunit més de 700 participants, representants de governs, organitzacions intergovernamentals i no governamentals, i agències de l'ONU³².

³¹ Consulteu la pàgina oficial de la Conferència a: <<http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP5/tabid/1267/mct1/ViewDetails/EventModID/870/EventID/109/xmid/4351/language/en-US/Default.aspx>>.

³² Consulteu la nota informativa sobre la cinquena reunió de la Conferència de les Parts en el Conveni d'Estocolm, UNEP/POPS/COP.5/INF/1, de 7 de febrer de 2011. Disponible a: <<http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP5/COP5Documents/tabid/1268/language/en-US/Default.aspx>>.

La Conferència de les Parts ha examinat i aprovat la proposta, presentada el 2007 per la Unió Europea, amb vista a la inclusió de l'endosulfan³³ en l'annex A del Conveni, i tal com va recomanar el Comitè d'Examen dels contaminants orgànics persistents³⁴, perquè s'eliminés i es gestionés un programa de treball per implementar alternatives per a aquest insecticida d'ús agrícola.

Més de 160 països van arribar a l'acord de retirar progressivament l'endosulfan, un pesticida perillós encara utilitzat al món sencer. Amb aquesta decisió, ja són 22 els químics que ha llistat el Conveni d'Estocolm³⁵ que són tòxics, duradors, i propensos a acumular-se en la cadena alimentària i en les persones.

L'endosulfan, contaminant orgànic persistent, s'ha de retirar de la producció i de l'ús en l'àmbit mundial. La decisió va tenir l'oposició de l'Índia, que és un país d'un nombre petit de països que encara produceix endosulfan. Per aquest motiu, les úniques excepcions a aquest acord general han estat l'Índia, la Xina i Uganda, que han sol·licitat vènies en combinacions cultius plaga específics com cotó, cafè, tabac, pomes, entre altres, amb un termini per l'excepció de cinc anys. En aquest sentit, s'aspira que aquest químic no se substitueixi per un altre químic de síntesi, sinó amb la forma d'alternatives agroecològiques de cultiu i control de plagues. A més, els països desenvolupats van estar d'acord a proporcionar l'ajuda tècnica i finançera expressament per substituir l'endosulfan per alternatives més segures.

Una altra qüestió que es va discutir en aquesta COP, abordada en una decisió adoptada en la reunió anterior, el 2009, va ser els dos retardadors de flames de corcats usats en aparells electrònics d'ús domèstic, mobles i altres productes que es van afegir a la Convenció d'Estocolm³⁶. Llavors, la Unió Europea i altres països desenvolupats es van

³³ L'endosulfan és un pesticida tòxic prohibit en vuitanta països, però encara s'usa a la Xina i l'Índia, a la major part d'Àfrica oriental, l'Argentina i Mèxic.

³⁴ En efecte, d'acord amb l'article 8 del Conveni, les parts poden presentar propostes d'inclusió d'un producte químic en els annexos A, B o C a la Secretaria. La Secretaria comprova si la proposta conté la informació necessària. Si és satisfactòria, la proposta s'envia al Comitè d'Examen dels Contaminants Orgànics Persistents (CE COP), que l'examina tenint en compte tota la informació facilitada. Quan el CE COP decideix que s'han complert els criteris, analitza la proposta i prepara un projecte de perfil de riscos.

³⁵ Quan es va adoptar aquest tractat, van incloure dotze substàncies a la llista. En l'última conferència, realitzada el 2009, se'n van agregar nou més.

³⁶ Vid. informe de la Conferència de les Parts en el Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents sobre la tasca realitzada en la quarta reunió UNEP/POPS/COP.4/38, 8 de maig de 2009. Disponible a: <<http://excops.unep.ch/documents/decisions/SC4-34-s.pdf>>.

beneficiar d'una exempció que permet exportar i reciclar productes usats que contenen aquests productes químics. Segons el tractat original, es va prohibir reciclar materials que continguin aquests productes químics i altres de semblants, ja que per la seva capacitat de contaminar encara més el flux de residus, posen en perill la salut humana i l'entorn³⁷.

El Comitè d'Examen va presentar un informe amb desenes de recomanacions per omplir aquests buits legals³⁸. En la COP 5, Kenya, en nom del Grup Africà i amb el suport de diferents parts, va proposar prohibir les exportacions a fi de prevenir la contaminació addicional generada per l'onada d'ordinadors, telèfons mòbils i altres aparells electrònics rebutjats provinents dels països desenvolupats. Després d'àrdues negociacions i de posicions divergents entre països del nord i del sud, es va adoptar un compromís dèbil que tan sols descoratja l'exportació d'aquests residus cap als països en vies de desenvolupament.

La dificultat d'arribar a consens sobre assumptes importants es va agreujar pel desacord permanent sobre les normes de procediment que han de guiar les deliberacions en el Conveni d'Estocolm. D'acord amb les regles adoptades en la primera sessió, les decisions sobre qüestions de fons, que no s'igualen esmenes al Tractat, han d'adoptar-se per consens. En la seva forma actual, la disposició que permet prendre decisions per majoria de dos terços de les parts presents i votants ha demostrat que és inoperant, perquè l'acord mateix sobre la votació requereix consens.

No obstant això, les negociacions han avançat en altres qüestions a fi d'aconseguir l'eficàcia del Conveni. En aquest sentit, i reconeixent que cal l'acció global per eliminar aquests contaminants globals, el Conveni d'Estocolm compromet ajuda finançera per als països en vies de desenvolupament. Els països desenvolupats i els països en vies de desenvolupament van arribar a un acord pragmàtic a fi de treballar per satisfer les necessitats tecnològiques amb els coneixements tècnics, posant especial èmfasi en les alternatives no químiques, com són les pràctiques agroecològiques. En tot cas, s'estima que els costos per als països en vies desenvolupament a l'hora de complir el tractat

³⁷ Sobre aquesta qüestió, consulteu el web oficial de l'IPEN a: <<http://ipen.org/cop5/brominated-flame-retardants/>> (visita feta el 8 de maig 2011).

³⁸ Disponible <<http://chm.pops.int/Convention/COP/hrMeetings/COP5/COP5Documents/tabid/1268/language/en-US/Default.aspx>>. a:

superen els recursos disponibles, de manera que al final no va haver-hi cap acord significatiu sobre la manera de reduir aquesta bretxa de finançament.

Així mateix, es van fer progressos per coordinar el Conveni d'Estocolm amb els altres dos tractats internacionals en matèria de comerç de productes químics perillosos i residus perillosos. Amb això es pretén reduir els costos a l'hora de complir i administrar aquests acords i de configurar un enfocament més coherent per gestionar productes químics a tot el món. Durant els últims deu anys, les parts no han arribat a cap acord a l'hora d'establir un mecanisme per complir el Conveni. En aquest sentit, les parts tenen com a objecte salvar les seves diferències durant el període provisional abans de la pròxima reunió, el 2013. En la declaració final, la Unió Europea va anunciar la intenció d'incloure l'hexaclorobutadiè, el pentaclorofenol i la napthalanes clorada al Conveni d'Estocolm.